El diario. Domingo 2 de julio de 2017

EJIDO SANTA ELENA, COAH. (Apro).- Con extrema meticulosidad, Silvia Ortiz examina las piedras, la arena y el carbón que los agentes de la Policía Ministerial de Coahuila han colocado sobre una mesa después de cernirlos con una malla. Con guantes estériles inspecciona pequeños trozos negros de menos de un centímetro de longitud y los separa del resto de residuos.

"Este es un pedacito de hueso. Lo distingues por su porosidad, dureza y brillo. Hay que separarlo para que lo analicen. Aunque sea un pedacito chiquito, es alguien que fue amado, y lo necesitan en una casa”, explica Silvia, presidenta del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), mientras estudia el material que había sido descartado por peritos forenses durante una excavación previa, en una zona poblada por abetos a unos cien metros.

Óscar Sánchez, esposo de Silvia, comenta: "Desde hace dos años decidimos salir a buscar en el monte y el desierto a nuestros seres queridos. Ya nos hicimos expertos en identificar sitios donde podría haber restos, pero nuestro trabajo no termina ahí: supervisamos a los peritos. Un huesito que se quede entre la tierra tal vez sea lo único que quede de una persona”.

Detrás de la zona resguardada por cintas amarillas, peritos vestidos con monos blancos escarban más o menos a 50 centímetros de la superficie, ennegrecida por el fuego, y rescatan pedazos de material negro. Durante aproximadamente tres horas extienden sobre pliegos de papel kraft incontables trozos de huesos humanos quemados con dísel. Entre ellos se distinguen partes de cráneo, dientes y falanges, según explican los analistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE).

Este ejido es uno de los cuatro puntos de La Laguna donde Vida ha hallado fosas clandestinas desde marzo del año pasado. Los otros son Patrocinio, Estación Claudio y San Antonio de Gurza. El grupo ha encontrado miles de fragmentos óseos. Sólo en Patrocinio extrajeron 85 mil pedacitos de huesos humanos calcinados. ¿Osamentas completas? Sólo 10.

Los sepulcros ilegales corresponden al modus operandi de Los Zetas, que sentaron sus reales en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011) y se mantuvieron los dos primeros años de la administración de su hermano Rubén, quien dejará el cargo en noviembre próximo.

El subprocurador de Personas Desaparecidas de la PGJE, José Ángel Herrera, informa que en Coahuila permanecen abiertos mil 815 expedientes por desaparición, la mayoría sobre hechos ocurridos entre 2006 y 2012.

Así, quien gobierne Coahuila a partir de diciembre próximo deberá esclarecer esos casos e identificar los miles de restos encontrados en la entidad, entre los que destacan 458 cuerpos depositados en fosas comunes como parte del Plan Estatal de Exhumaciones acordado por el gobierno de Rubén Moreira y los cuatro colectivos de familiares de desaparecidos de la entidad: Vida, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (de Piedras Negras) y Alas de Esperanza (Allende).

Madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en 2004, Silvia Ortiz dice: "Sé que a mi hija no la voy a encontrar entre los restos calcinados, porque esa técnica la empezaron a usar los delincuentes después de que se llevaron a mi niña, pero yo sé lo que sienten mis compañeras: una gran desesperación de ver a funcionarios que se dedican a hacer oficios de colaboración o que te piden que les lleves a los testigos y hasta que consigas los teléfonos de los responsables de llevarse a tu hijo o hija”.

Silvia, quien fue maestra de secundaria, inició la búsqueda en enero de 2015 acompañada de otros familiares de desaparecidos y de su esposo. Al principio iban por su cuenta y riesgo a verificar las versiones anónimas de la ubicación de sitios "de exterminio”, como les han llamado, pero a partir de mayo de 2015 empezaron a ser resguardados por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y agentes ministeriales.

"Las autoridades de la procuraduría entendieron que debían acompañarnos, aunque todavía les falta agarrar la pala y la varilla para buscar restos”, dice.

VOLUNTAD INQUEBRANTABLE

Sábado 3 de junio. Los integrantes de Vida enfilan rumbo a La Gilita, Matamoros, zona desértica a 30 minutos de la carretera, para buscar vehículos abandonados relacionados con casos de desaparición.

Escondiéndose de los rayos del sol —mientras Silvia, policías federales y militares buscan el número de identificación de una camioneta enterrada— cuatro integrantes del grupo bromean entre ellas.

Han acudido a la mayoría de las búsquedas y encontrado restos en alrededor de 10 sitios. De origen humilde, las mujeres cuentan que han perdido sus pocos bienes por allegarse recursos para dedicarse a la búsqueda de sus hijos o hermanos. Procuran conseguirse trabajos que les permitan tener libres los sábados para poder participar en los rastreos, labor que las aleja de sus parejas, familias y amigos.

"Cuando encontramos restos, a todas nos da para abajo, nos sentimos tristes porque no queremos que sea nuestro hijo, y a la vez satisfechas porque pensamos que esa personita ya va a regresar a casa”, comenta Sonia Castañeda, madre de Guillermo Contreras, desaparecido por policías municipales en julio de 2014, en Torreón.

"No nos sentimos solas porque otra persona no te va a entender. Sentimos feo que nos digan: ‘Ya deja de buscar, ha de estar muerto, déjaselo a Dios’”, añade Rosa María Flores García, madre de Sergio Vázquez, desaparecido en febrero de 2010 también por policías municipales de Torreón.

Acompañadas de Rocío Hernández —hermana de Felipe Hernández, levantado en una ranchería de Torreón en 2011 presuntamente por miembros de la delincuencia organizada— las tres mujeres narran las vicisitudes que han atravesado en el intento por que sus casos sean investigados. Aún no tienen respuesta, pese a que en los casos de Sonia y Rosa los responsables están plenamente identificados.

La presión de los colectivos, eso sí, ha empujado al gobierno de Rubén Moreira a promulgar reformas a la constitución local y al Código Penal contra la desaparición forzada y la perpetrada por particulares, así como la Ley de Presunción de Ausencia por Desaparición, además de apuntalar la identificación de restos, crear instituciones para la búsqueda o colaborar con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Cruz Roja Internacional y contratar servicios de un laboratorio privado para la identificación forense.

En lo anterior coinciden María Elena Salazar y Ángeles Mendieta, madres de Hugo Marcelino González e Iván Baruch Núñez, respectivamente, desaparecidos en 2009 y 2011. Ellas son integrantes de Fundec, que agrupa a 120 familias que exigen conocer el destino de 490 personas.

Entrevistadas ante el inconcluso Memorial de los Desaparecidos (en la Alameda Zaragoza, de Torreón, y promovido por el entonces alcalde priísta Miguel Riquelme —cuya elección como gobernador está en litigio), reprochan que el estado no haya realizado búsquedas en vida, y que ahora los esfuerzos se centren en el rescate de restos.

"¿Para qué tantos huesos si no hay recursos e infraestructura para identificarlos?”, cuestiona Mendieta.

(Este reportaje ha sido posible por el apoyo generoso del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de Proceso y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.)